

BOLETIN OFICIAL

DE LA REPUBLICA ARGENTINA

BUENOS AIRES, VIERNES 22 DE SETIEMBRE DE 1995

AÑO CIII

\$ 0,70

Nº 28.234

1ª LEGISLACION Y AVISOS OFICIALES

Los documentos que aparecen en el BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esta publicación y por comunicados y suficientemente circulados dentro de todo el territorio nacional (Decreto Nº 659/1947)

MINISTERIO DE JUSTICIA

DR. RODOLFO C. BARRA
MINISTRO

SECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES

DR. JOSE A. PRADELLI
SECRETARIO

DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL

DR. RUBEN A. SOSA
DIRECTOR NACIONAL

Domicilio legal: Suipacha 767
1008 - Capital Federal

Tel. y Fax 322-3788/3949/
3960/4055/4056/4164/4485

Registro Nacional de la
Propiedad Intelectual
Nº 405.351

c) Todo otro que sea consecuencia de la implementación de modalidades de privatización análogas a las previstas por el artículo 17 de la ley 23.696;

d) Para el caso particular de los entes públicos provinciales y municipales, prestadores de servicios de saneamiento destinados a la provisión de agua y desagües, se aplicará lo dispuesto en la presente ley y, se los eximirá a partir del 1º de enero de 1993, del impuesto a las ganancias por cuatro ejercicios fiscales y del impuesto sobre los activos hasta el cese de su vigencia o, en ambos casos, hasta la finalización del proceso de privatización si ello se produce con anterioridad.

ARTICULO 2º — Todo ente provincial o municipal que con motivo de procesos de reestructuración administrativa y/o patrimonial sea declarado en estado de disolución o liquidación, estará exento de todos los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización tenga a su cargo la Dirección General Impositiva y la Administración Nacional de Aduanas.

Para gozar del beneficio indicado en el párrafo precedente la autoridad provincial o municipal remitirá al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos el último balance aprobado, un proyecto de balance de liquidación que detalle el estado del activo y del pasivo del ente sujeto a disolución y toda otra información o documentación que disponga el citado ministerio para resolver sobre la procedencia de la franquicia.

ARTICULO 3º — Los montos que perciban quienes se acojan a regímenes de retiro voluntario, establecidos por los estados provinciales o las municipalidades, sus empresas, organismos, dependencias, etcétera, gozarán de los beneficios contemplados en el artículo 4º del decreto 287 del 7 de febrero de 1992, si los regímenes mencionados observan características análogas a las de éste.

A los fines precedentes, los entes provinciales o las municipalidades solicitarán al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social quien resolverá dentro de los quince (15) días corridos de recibida la solicitud, si las características del régimen de retiro voluntario dispuesto, cumple con las condiciones exigidas en el párrafo anterior.

ARTICULO 4º — Los montos correspondientes a retiros voluntarios pagados, total o parcialmente, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, podrán gozar de los beneficios del artículo 3º cuando se verifiquen en forma concurrente las siguientes condiciones:

a) Que los montos totales o parciales hubieran sido percibidos por los beneficiarios a partir de la fecha de entrada en vigencia del decreto 287 del 7 de febrero de 1992;

b) Que se obtenga del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y dentro de los plazos que el mismo establezca, la conformidad a que alude el artículo antes mencionado y se comunique a los beneficiarios, antes del vencimiento del plazo que fije la Dirección General Impositiva para la presentación de la declaración jurada del período 1995, el tratamiento aplicable a los montos abonados por el concepto aludido.

ARTICULO 5º — Decláranse remitidas las deudas tributarias nacidas con anterioridad a la entrada en vigencia de las exenciones acordadas por la presente ley, siempre y cuando se cumplan a su respecto las condiciones exigidas por los artículos 1º, 2º y 3º.

ARTICULO 6º — El Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos será el organismo de aplicación de la presente ley.

ARTICULO 7º — Comuníquese al Poder Ejecutivo. — ALBERTO R. PIERRI. — CARLOS F. RUCKAUF. — Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo. — Edgardo Piuze.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

REGIMEN DE IDENTIFICACION PARA LOS RECIEN NACIDOS

Ley 24.540

Sancionada: Agosto 9 de 1995

Promulgada de Hecho: Setiembre de 1995

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1º — Todo niño nacido vivo o muerto y su madre deben ser identificados de acuerdo con las disposiciones de esta ley.

ARTICULO 2º — Cuando el nacimiento aconteciere en un establecimiento médico

asistencial público o privado, durante el trabajo de parto deberá identificarse a la madre, y producido el nacimiento y antes del corte del cordón umbilical, al recién nacido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6º.

ARTICULO 3º — Cuando el cumplimiento de lo ordenado en el artículo anterior pudiere importar riesgo para la integridad psicofísica de la madre o del niño, el profesional médico a cargo podrá disponer la postergación de la obtención de los calcos papilares para otro momento más conveniente, a la mayor brevedad, extremando las medidas necesarias para asegurar la indemnidad del vínculo madre-hijo.

ARTICULO 4º — En caso de prematuridad, se procederá a la toma de los calcos papilares del recién nacido aunque no esté presente ningún surco transversal. Cuando éstos aparecieren, se procederá a la identificación antes del egreso del establecimiento médico asistencial.

ARTICULO 5º — En los supuestos no previstos en el artículo anterior, como son las malformaciones congénitas o de cualquier otra naturaleza, que impidan la identificación total o parcial conforme los procedimientos ordenados, el profesional asistente deberá dejar cons-

SUMARIO

FRANQUICIAS

Ley 24.537

Establécense un régimen de exención tributaria para las operaciones que se efectúen con el fin de privatizar empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas que pertenezcan total o parcialmente a los estados provinciales o las municipalidades.

Sancionada: Agosto 9 de 1995
Promulgada de Hecho: Setiembre 18 de 1995

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1º — Estarán exentas de todo tributo las operaciones que se efectúen con el fin de privatizar empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas que pertenezcan total o parcialmente a los estados provinciales o las municipalidades.

Las operaciones a que se refiere el párrafo anterior son las que se realicen durante cada proceso de privatización y hasta su finalización, quedando comprendidos en las franquicias los tributos, incluidos los impuestos internos, que se indican a continuación, como así también las ganancias o resultados derivados de los mismos:

a) Las ventas de los activos de los entes, cualquiera sea su naturaleza jurídica, como unidad o en forma separada;

b) Los casos de reorganizaciones contemplados en el artículo 77 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, texto ordenado en 1986 y sus modificaciones;

COMERCIO EXTERIOR

Resolución 253/95-MEYOSP

Suspéndese la investigación relativa a la existencia de dumping en operaciones de importación de machos de roscar de acero rápido y acero al carbono producidos por Dormer Tools S.A. y originarios de la República Federativa del Brasil.

Resolución 254/95-MEYOSP

Clausúrase la investigación por presunto subsidio en operaciones de importación de aceite de oliva, virgen y refinado, originario de la Unión Europea.

Resolución 272/95-MEYOSP

Clausúrase la investigación que se lleva a cabo por dumping en importaciones de tejido denim indigo, originario de la República Federativa del Brasil.

DEUDA PUBLICA

Decreto 483/95

Modifícase el Decreto Nº 1639/93, por el que se establecen procedimientos que garanticen el cumplimiento de pronunciamientos judiciales de obligaciones consolidadas en virtud de la Ley Nº 23.982

FRANQUICIAS

Ley Nº 24.537

Establécense un régimen de exención tributaria para las operaciones que se efectúen con el fin de privatizar empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas que pertenezcan total o parcialmente a los estados provinciales o las municipalidades.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Resolución 258/95-MEYOSP

Dase por concluida la liquidación de Conarsud Asesoramiento y Consultoría Sociedad Anónima (en liquidación).

NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR

Resolución 294/95-MEYOSP

Establécense que, las exportaciones para consumo de mercaderías constituidas por determinados metales preciosos, cualquiera que fuera su Posición Arancelaria (NCM), percibirán el reintegro de los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos interiores en las distintas etapas de producción y comercialización

OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resolución General 4057/95-DGI
Sistema Unico de la Seguridad Social. Régimen Nacional de Obras Sociales. Resolución Conjunta Nº 202 (M.E. y O. y S.P.) y Nº 202 (M.T. y S.S.). Fiscalización y ejecución judicial de aportes y contribuciones. Deudas determinadas. Forma de ingreso.

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resolución General 4058/95-DGI
Procedimiento. Decretos Nºs 270/95, 271/95 y 272/95. Regímenes de presentación espontánea y facilidades de pago. Resoluciones Generales Nºs 4.042, 4.043 y 4.047 y sus respectivas modificatorias. Cumplimiento de obligaciones. Plazo especial.

REGIMEN DE IDENTIFICACION PARA LOS RECIEN NACIDOS

Ley Nº 24.540

TABACO

Resolución 103/95-IASCAV
Apruébase el Patrón tipo de calidad para la comercialización del Tabaco Criollo Salteño.

REMATES OFICIALES

Anteriores

AVISOS OFICIALES

Nuevos

Anteriores

REO
VTINO

IAL "B"

A PAGAR
Cuenta Nº 1013

tancia de ello en la ficha identificatoria. En el caso de identificación parcial se tomará el calco posible, dejando constancia en la ficha identificatoria del motivo que impide las tomas restantes.

ARTICULO 6° — La identificación deberá hacerse en una ficha única, numerada por el Registro Nacional de las Personas, en tres ejemplares, en la que constarán los siguientes datos:

— De la madre: nombre y apellido, tipo y número de documento de identidad e impresión decadactilar.

— Del niño: nombre con el que se lo inscribirá, sexo, calcos papilares palmares y plantares derechos, y clasificación de ambos.

— Si el niño ha nacido con vida.

— Nombre, apellido y firma del identificador interviniente.

— Nombre, apellido y firma del profesional que asistió el parto.

— Fecha, hora y lugar del nacimiento y de la confección de la ficha.

— Calcos tomados al egreso.

— Datos del establecimiento médico asistencial: nombre y domicilio.

— Observaciones.

ARTICULO 7° — Si al momento del parto la madre no presentare documento que acredite su identidad, deberá hacerlo al dársele el alta médica. En caso de no presentarlo deberá dejarse constancia de ello en la ficha.

ARTICULO 8° — En partos múltiples se realizará el mismo procedimiento para cada uno de los recién nacidos.

ARTICULO 9° — La obtención de los calcos papiloscópicos deberá hacerse por personal idóneo dependiente de los establecimientos médico-asistenciales donde se produjera el nacimiento; su actuación se hallará subordinada al profesional médico a cargo en el momento del parto.

ARTICULO 10. — Los calcos dactilares de ambos pulgares de la madre y los calcos palmar y plantar derechos del recién nacido deberán tomarse nuevamente en las fichas identificatorias al egreso del establecimiento.

ARTICULO 11. — Cuando se retire el niño sin su madre deberán tomarse sus impresiones papilares y registrarse los datos personales de quien lo retire, tipo y número de documento de identidad, y las impresiones de ambos pulgares.

ARTICULO 12. — En caso de niños nacidos muertos o que fallecieron antes del alta del establecimiento médico asistencial, se procederá conforme los artículos 10 y 11.

ARTICULO 13. — Un ejemplar de la ficha identificatoria quedará archivado en el establecimiento asistencial. Los otros dos serán entregados a la madre o a quien retire al recién nacido, uno para la inscripción del nacimiento en el Registro Civil que lo remitirá al Registro Nacional de las Personas para su clasificación y archivo, quedando el restante en poder de la familia.

ARTICULO 14. — Sin perjuicio de la responsabilidad de las autoridades del establecimiento médico asistencial por el incumplimiento de la presente ley, el identificador y el profesional médico a cargo del parto son responsables por la protección e integridad de la identificación del binomio madre-hijo.

ARTICULO 15. — Cuando el nacimiento no acontezca en un establecimiento médico asistencial, la identificación de la madre y el niño deberá hacerse en ocasión de la inscripción del nacimiento en el Registro Civil si se realiza dentro de los plazos legales.

ARTICULO 16. — Las provincias que tengan vigente un sistema de identificación de recién nacidos, continuarán con el mismo hasta tanto se implemente la presente ley.

ARTICULO 17. — Es autoridad de aplicación el Ministerio del Interior a través del Registro Nacional de las Personas y los organismos sanitarios jurisdiccionales que correspondan.

ARTICULO 18. — Sustitúyense del decreto ley 8204/63 los artículos 31 y 36 por los siguientes:

Artículo 31: El hecho del nacimiento se probará con el certificado del médico u obstétrica y con la ficha única de identificación.

Artículo 36: Si del certificado del médico u obstétrica surgiera que se trata de un nacido muerto o nacido con vida, aunque fallezca inmediatamente, se procederá a efectuar la identificación del recién nacido y se asentarán los hechos en los libros de nacimiento y de defunciones según corresponda.

ARTICULO 19. — Sustitúyese el artículo 242 del capítulo II del título II de la sección II del libro 1° del Código Civil por el siguiente:

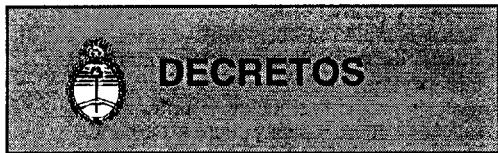
Artículo 242: La maternidad quedará establecida, aun sin reconocimiento expreso, por la prueba del nacimiento y la identidad del nacido. La inscripción deberá realizarse a petición de quien presente un certificado del médico u obstétrica que haya atendido el parto de la mujer a quien se atribuye la maternidad del hijo y la ficha de identificación del recién nacido. Esta inscripción deberá serle notificada a la madre salvo su reconocimiento expreso, o que quien hubiese denunciado el nacimiento fuere el marido.

ARTICULO 20. — La presente ley será de aplicación en todo el territorio de la República.

ARTICULO 21. — El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de sesenta días de su publicación.

ARTICULO 22. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. — ALBERTO R. PIERRI. — CARLOS F. RUCKAUF. — Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo. — Edgardo Piuizzi.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.



DEUDA PUBLICA

Decreto 483/95

Modifícase el Decreto N° 1639/93, por el que se establecen procedimientos que garanticen el cumplimiento de pronunciamientos judiciales de obligaciones consolidadas en virtud de la Ley N° 23.982.

Bs. As., 20/9/95

VISTO la Ley N° 23.982, el Decreto N° 1639 del 4 de agosto de 1993 y la Resolución N° 1084 del 24 de setiembre de 1993 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N° 1639/93 se dictó a los fines de agilizar el trámite de pago de la deuda consolidada, reconocida por sentencias judiciales firmes.

Que por ello se estableció un procedimiento dando oportunidad a los Tribunales actuantes para suscribir en sustitución del organismo deudor el formulario de requerimiento de pago, en cuyo caso la autoridad administrativa se encontraba obligada a dar curso a la orden de pago dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles.

Que la aplicación de dicho procedimiento demostró que en algunos casos no se cumplían integralmente los recaudos impuestos por las normas vigentes, lo que ocasionó

no serios trastornos administrativos, que impidieron o retrasaron el pago de la deuda.

Que en otros supuestos ocurre que el acreedor no cumplimentó las obligaciones contenidas en la reglamentación, lo que impide la liquidación en el mencionado plazo de QUINCE (15) días hábiles.

Que la falta de intervención del ente deudor previa al pago de la deuda consolidada, demostró que el pago de algunas obligaciones puede determinar perjuicios al Estado Nacional al reexpresar la obligación en Dólares Estadounidenses aplicando un tipo de cambio que no corresponde, al existir la posibilidad de un doble pago y/o al cambiar la forma de pago elegida por el acreedor en sede administrativa, aspectos que no pueden ser controlados por la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS por desconocer las respectivas actuaciones.

Que por lo expuesto corresponde adecuar el procedimiento de ejecución de sentencias judiciales comprendidas en los términos de la Ley N° 23.982, de forma tal de garantizar el cumplimiento íntegro del pronunciamiento judicial, así como asegurar que dicho cumplimiento no importe un perjuicio para el Estado Nacional que el sistema actualmente vigente posibilitaría.

Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 2° de la Constitución Nacional.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Elevase a CIENTO VEINTE (120) días corridos el plazo de NOVENTA (90) días fijado en el primer párrafo del artículo 1° del Decreto N° 1639/93.

Art. 2° — Sustitúyese el artículo 4° del Decreto N° 1639/93 por el siguiente:

"ARTICULO 4°. — Extinguido el plazo previsto, o en su caso, la prórroga concedida, el Tribunal de la causa estimará al ente deudor a que dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles le acredite haber diligenciado el formulario de requerimiento de pago de deuda consolidada, suscrito por acreedor y deudor, para lo cual deberá contar con la debida constancia de recepción por parte de la dependencia competente de la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS."

"Dentro del plazo de VEINTE (20) días corridos de recibido conforme dicho formulario —el que deberá ser acompañado de la copia certificada por autoridad administrativa del Oficio Judicial que intima su diligenciamiento— la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS deberá darle curso y disponer la acreditación a la orden del Juzgado, Secretaría y Autos de que se trate, de los BONOS DE CONSOLIDACION en la CAJA DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA."

"En los casos en que se haya efectuado la opción de cobro parcial o total en efectivo, la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, deberá ordenar la acreditación a la orden del Juzgado, Secretaría y Autos de que se trate, en la entidad oficial correspondiente a la jurisdicción del Tribunal, de acuerdo al régimen de prioridades estatuido por el artículo 7° de la ley N° 23.982, sus normas reglamentarias y según los límites presupuestarios impuestos en la ley específica del ejercicio fiscal en curso. En estos casos no será de aplicación el plazo previsto en el párrafo anterior."

"La notificación al Tribunal de las acreditaciones de los pagos ordenados, será constancia suficiente de cancelación de la obligación."

Art. 3° — Déjase sin efecto el artículo 5° del Decreto N° 1639/93.

Art. 4° — Sustitúyese el artículo 6° del Decreto N° 1639/93 por el siguiente:

"ARTICULO 6°. — Recibida la intimación a que se refiere el artículo 4°, el ente deudor deberá verificar que la liquidación recibida se ajusta en todos sus términos a las normas vigentes, disponer la suspensión de la tramitación administrativa y proceder de la manera allí indicada. En caso de encontrarse radiadas las actuaciones en el ente de control, deberá solicitar la inmediata remisión de aquéllas a fin de dar cumplimiento a la intimación del Tribunal."

"Una vez cumplido con el procedimiento establecido en el artículo 4° del presente, el ente deudor girará lo actuado a su órgano de control a fin de que tome la intervención que le compete, la que resultará posterior al acto de pago, en los términos de los artículos 101 y 102 de la Ley N° 24.156."

Art. 5° — Sustitúyese el artículo 7° del Decreto N° 1639/93 por el siguiente:

"ARTICULO 7°. — Para solicitar el pago de las deudas consolidadas derivadas de gestión judicial, los titulares de los derechos que hayan sido definitivamente reconocidos, deberán presentar la liquidación aprobada y firme de sus acreencias expresada en Pesos al 1° de abril de 1991, conforme lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 23.982."

"Las deudas consolidadas que se paguen en Moneda Nacional devengarán, a partir del 1° de abril de 1991, la tasa de interés promedio de Caja de Ahorro Común que publica el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, capitalizable mensualmente."

"Las deudas así consolidadas que se paguen total o parcialmente con BONOS DE CONSOLIDACION en Moneda Nacional, se cancelarán mediante la entrega de los citados bonos tomando en consideración su valor nominal."

"En caso que a opción del acreedor corresponda reexpresar la deuda en Dólares Estadounidenses, para la suscripción de BONOS DE CONSOLIDACION en esa moneda, se aplicará el tipo de cambio vendedor correspondiente a la fecha de origen de la obligación definida en el artículo 2° inciso g) del Decreto N° 2140/91, siguiendo a su respecto la metodología establecida en el artículo 14 inciso b) de dicho cuerpo legal. El importe resultante en Dólares Estadounidenses se consolidará sin intereses ni actualizaciones al 1° de abril de 1991, y se cancelará mediante la entrega de los citados bonos a su valor nominal."

"En ningún caso, el monto de la reexpresión de la deuda en Dólares Estadounidenses podrá superar al que resultaría de convertir el importe de la liquidación en Pesos al 1° de abril de 1991, por el tipo de cambio de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO DIEZMILESIMOS (\$ 0,9635) por Dólar Estadounidense."

A los fines de la reexpresión de la deuda a Dólares Estadounidenses, será de aplicación el Comunicado "A" 1912 del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA de fecha 18 de diciembre de 1991."

Art. 6° — Cuando la sentencia judicial condene al pago de una suma determinada de dinero, estableciendo el origen de la deuda en una fecha posterior al 1° de abril de 1991, no se reconocerán intereses sino desde esa fecha de origen, para lo cual deberá consignarse la misma en el campo "fecha" del Formulario de Requerimiento de Pago de Deuda Consolidada.

En estos casos, la opción del acreedor por percibir su crédito en BONOS DE CONSOLIDACION en Dólares Estadounidenses, importará la conversión de la deuda a esa moneda, aplicando el tipo de cambio vendedor en el mercado libre que corresponda a la fecha de origen establecida por la sentencia, consignándola en el campo "fecha" del Formulario de Requerimiento de Pago de Deuda Consolidada, a fin de que se reconozcan intereses sólo a partir de dicha fecha.

Art. 7° — Los Formularios de Requerimiento de Pago de Deuda Judicial Consolidada, aprobados por la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS N° 1084 del 24 de setiembre de 1993, debidamente cumplimentados, y que a la fecha del presente permanezcan impagos en la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS serán cancelados por ésta.